

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTINUEVE (29) ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C. veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	11001-33-35-028-2022-00391-00
DEMANDANTE	ARGEMIRO ARLLEY SAZA PINEDA
DEMANDADA	NACIÓN – RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

OBJETO

Procede el Despacho a proveer lo pertinente, teniendo en cuenta que, el proceso de la referencia proviene del Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con declaración de impedimento por parte de esa sede judicial.

ANTECEDENTES

1. De conformidad con la demanda promovida a través de apoderado judicial por el señor **ARGEMIRO ARLLEY SAZA PINEDA**, en contra de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** (03Demanda.pdf), las pretensiones se encuentran encaminadas a que, como consecuencia de la **inaplicación por inconstitucional** de la expresión “Grado 23” del cargo de “Abogado Asesor” de Tribunal de Distrito Judicial contenida en el artículo 1º del Acuerdo PSAA11-8919 del 09 de diciembre de 2011 “y todos los acuerdos en que se mencione esa expresión”; se declare la **nulidad** de los actos administrativos que se relacionan en el libelo introductorio y, en consecuencia, se ordene a la demandada, de manera general, a reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor Grado 23 y Abogado Asesor de Tribunal Superior conforme a los decretos de asignación salarial y prestacional para funcionarios y empleados de la Rama Judicial, desde el 11 de enero de 2012 hasta la actualidad (con excepción del 1º de enero de

2015 al 1º de febrero del mismo año), y, en adelante, siempre que ostente ese empleo en la Rama Judicial.

2. La señora Juez 28 Administrativo del Circuito de Bogotá, doctora **MÓNICA LORENA SÁNCHEZ ROMERO**, invocando la causal prevista el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, se declaró impedida para conocer del presente proceso, toda vez que le podría asistir interés indirecto en las resultas del mismo en razón a que durante la carrera que ha desempeñado en la Rama Judicial ejerció el cargo de Abogado Asesor Grado 23 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hasta el año 2022.

Como sustento de su dicho aporta certificación laboral.

Agrega que el abogado **DANIEL RICARDO SÁNCHEZ TORRES**, que funge como apoderado del señor **ARGEMIRO ARLLEY SAZA PINEDA**, aquí demandante, también actuó como su apoderado en la reclamación que ella promovió con el fin de obtener el reconocimiento de los efectos salariales de la Bonificación Judicial, que correspondió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 110013342057201700013 00; frente a lo cual explica que, si bien en el proceso ya se profirió sentencia de segunda instancia, dicho abogado ha continuado en la etapa de solicitud de cumplimiento de la sentencia y eventualmente, continuará en el proceso ejecutivo si es necesario, pues se trata de su abogado de confianza; lo cual refiere se constata con la consulta en el informativo de la página de la Rama Judicial que da cuenta del movimiento del proceso en segunda instancia en donde se indica el nombre del referido profesional.

3. En aplicación del trámite establecido artículo 131 ibidem, la señora Juez 28 Administrativo de Bogotá remitió el expediente a esta sede judicial.
(08.AutoImpedimentoDemanda.pdf)

CONSIDERACIONES

El artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, al establecer el deber para los jueces y magistrados de declararse impedidos, además de enlistar algunas causales para el efecto, que también se erigen como situaciones que ameritan recusación; remite a las causales consagradas

en el artículo 141 del Código General del Proceso, entre las que se encuentra la de tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

Frente al tema, es pertinente destacar que los impedimentos y las recusaciones encuentran su fundamento en el principio de imparcialidad como un derrotero del derecho, pues se erigen como la garantía que permite el acceso a la administración de justicia de una forma transparente garantizando decisiones judiciales libres de interés o apremio que también garantiza el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso.

Siendo el asunto de especial relevancia, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de nuestra jurisprudencia, en donde, a manera de ejemplo, a continuación se cita un aparte de la sentencia del 11 de abril de 2012 de la Sala De lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A radicación 76001-23-25-000-1996-02120-01(20756), en la que el H. Consejo de Estado expuso lo siguiente:

“(…) Los impedimentos están instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor. Para ello, la ley procesal estableció, de manera taxativa, unas causales de impedimento y recusación, cuya configuración, en relación con quien deba decidir un asunto, determina la separación de su conocimiento. De manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en los artículos 150 del Código de Procedimiento Civil y 160 del Código Contencioso Administrativo. La causal aludida se encuentra contenida en el numeral 14 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, así: “Artículo 150 Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar”. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Mauricio Fajardo Gómez, por cuanto la situación fáctica planteada, se enmarca dentro del supuesto contenido en la norma,

razón por la cual, a fin de velar por la objetividad de la decisión que deba adoptarse, se aceptará e impedimento y, en consecuencia se le declarará separado del conocimiento del presente asunto”.

Ahora, con relación al trámite de los impedimentos de los Jueces Administrativos, el artículo 131 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente:

“Artículo 131. Trámite de los impedimentos.

Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.
2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará con juez para el conocimiento del asunto”.

3.

Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, esta sede judicial concluye que, habiendo la señora Juez 28 Administrativo de Bogotá ostentado el cargo de Abogada Asesora grado 23, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y haber tenido como abogado de confianza el mismo profesional que represento al demandante, de cara a las pretensiones incoadas por el señor **ARGEMIRO ARLLEY SAZA PINEDA**, se materializa la causal de impedimento que invoca la funcionaria judicial. En consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se procederá a proveer sobre la admisión de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintinueve Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR el **IMPEDIMENTO** presentado por la señora **JUEZ VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ**; doctora, **MÓNICA LORENA SÁNCHEZ ROMERO**, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SOLICITAR a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá, la **ASIGNACIÓN** de nuevo número de radicación correspondiente al consecutivo de este Juzgado y dejar las respectivas constancias para garantizar el acceso de las partes a la consulta del expediente con el nuevo radicado que sea asignado.

TERCERO: Por considerar que reúne los requisitos legales, este Despacho dispone **ADMITIR** la demanda presentada por el señor **ARGEMIRO ARLLEY SAZA PINEDA**, identificado con cédula de ciudadanía **80.793.675** de Bogotá; en contra de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**.

En consecuencia, se ordena que por Secretaría se adelanten las siguientes actuaciones:

1. Notificar personalmente el presente auto admisorio de la demanda al **DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – BOGOTÁ** o a su delegado y al **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** de conformidad con lo señalado en el artículo 199 de la Ley 1427 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.
2. Remitir copia electrónica del presente auto admisorio, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del Decreto Ley 4085 de 2011 o la norma que lo sustituya.

3. Correr traslado de la demanda por el término de treinta (30) días para los efectos de que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011. El traslado o los términos que conceda la presente providencia, solo se empezarán a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

De conformidad con lo previsto en el artículo 175 del C.P.A.C.A., dentro del término de traslado, la parte demandada, deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso, así como la totalidad de las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer. La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria del funcionario encargado del asunto.

En los términos y para los efectos del memorial poder obrante dentro del plenario, se reconoce personería adjetiva al abogado **DANIEL RICARDO SÁNCHEZ TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía **80.761.375** y portador de la tarjeta profesional **165.362** del C.S.J. para que actúe como apoderado de la parte actora.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

MV

EXPEDIENTE: 11001333502920220039100
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ARGEMIRO ARLLEY SAZA PINEDA
DEMANDADA: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
DEMANDANTE:	arleysaza@gmail.com danielsancheztorres@gmail.com